

BOLETIN DE NOTICIAS

COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID

Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59 Email:cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.

En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

BOLETÍN NÚMERO 240

FECHA: 2 de Mayo de 2016

SUMARIO

PAÍS	CONTENIDO	NºPG.
BOLIVIA	TRABAJO INFANTIL Y EL PROYECTO GUBERNAMENTAL DE DESCOLONIZACIÓN QUE DESAFÍA A LA OIT	2
COLOMBIA	"EL GOBIERNO DE SANTOS ES UNA CONTINUACIÓN DEL MODELO NEOLIBERAL QUE EN COLOMBIA YA LLEVA UN CUARTO DE SIGLO"	4
GUATEMALA	LOS ROSTROS DEL AGUA	10
HONDURAS	CONATEL QUIERE DESMANTELAR LAS RADIOS COMUNITARIAS DEL COPINH	12
MÉXICO	LAS PATRONAS Y EL OBISPO RAÚL VERA RECIBEN LA "MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSIDAD VERACRUZANA"	13
NICARAGUA	ATENDERÁN A 200 MIL PERSONAS EN HOSPITAL DE NUEVA GUINEA	14
PANAMÁ	¿EL ATAQUE CONTRA MOSSACK Y FONSECA ES UN ATAQUE CONTRA PANAMÁ?	14
PUERTO RICO	ENCERRONA PARA ESTADOS UNIDOS EN PUERTO RICO	16
VENEZUELA	MAS DE CUARENTA ORGANIZACIONES ESPAÑOLAS SUBSCRIBEN MANIFIESTO POR VENEZUELA BOLIVARIANA	17
	¿QUIÉN MATÓ A MONTESQUIEU?	18
	RADIOGRAFÍA DE LA MUD	20

BOLIVIA

TRABAJO INFANTIL Y EL PROYECTO GUBERNAMENTAL DE DESCOLONIZACIÓN QUE DESAFÍA A LA OIT

En 2014, el Gobierno del Presidente Evo Morales promovió una ley que establece que el trabajo infantil en el país puede desarrollarse desde los 10 años, el único país del mundo en haber aprobado una norma de ese tipo. El código de Niñez y adolescencia establece que los niños pueden trabajar a partir de los 10 años en el entorno familiar, y desde los 12 años para terceros.

Segundo Encuentro Plurinacional de Educación de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores

"Yo trabajo desde hace cuatro años. Lavo los platos en el puesto de comida de mi vecina y estudio por las tardes. El dinero que gano es para ayudar a sostener a mi familia, porque el sueldo de mi mamá (trabajadora del hogar) no nos alcanza", afirma Mario. Tiene 15 años y en retribución a su labor recibe 400 bolivianos al mes.

Su testimonio fue uno de los que se escucharon el viernes 29 de abril de 2016 en el Segundo Encuentro Plurinacional de Educación de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores, organizado por el Ministerio de Educación. "No me avergüenza trabajar, contó el adolescente. Todos mis amigos y mis maestros saben que trabajo, pero muchos profes no toleran los atrasos. Quisiera que consideren".

Como Mario, en el país hay 34.000 estudiantes que trabajan, ganan un sueldo y estudian a la vez, reveló el ministro de Educación, Roberto Aguilar. Precisó que el dato se obtuvo por primera vez a través del Registro Único de Estudiantes (RUDE), relata la periodista Verónica Zapana.

Al inicio de gestión se consultó a todos los escolares del país si trabajaban y si obtenían remuneración por ello. "34.000 dijeron que sí, vale decir que son el 1,22% de los 2,8 millones de colegiales que registra el sistema educativo", informó.

De acuerdo a los datos del RUDE, hay otro grupo de escolares que trabaja, pero no recibe un salario. "Cuando uno considera el trabajo doméstico o el familiar se incorpora a otros 260.000 niños", precisó Aguilar.

Según la representante de la Unión de Niños y Niñas Adolescentes Trabajadores de Bolivia, (UNATSBO), Lizeth Reina Castro, en Bolivia hay más de 34.000 niños trabajadores, pero estos no estudian. Pidió por ello que dé carnets a esta población para tener un dato real de este sector. "En nuestros registros tenemos a más de 800 mil", afirmó.

El Ministro de Educación comentó que lo que se busca con el encuentro, es lograr la inclusión de todos los niños al sistema educativo.

En el pleno del evento consultó a un centenar de niños ¿quienes están estudiando? Todos levantaron la mano. Este es uno de los temas que queremos que se fortalezca, que tengan las condiciones adecuadas y que desarrollen sus estudios sin que los discriminen, maltraten o estigmaticen por su labor", apuntó.

En Bolivia, el Código Niño, Niña, Adolescente -promulgado en junio de 2014- permite el trabajo infantil desde los 10 años.

Aguilar explicó que el Estado admitió esa situación porque el trabajo infantil es una realidad en el país. "Si se negaría, se ocultaría esta realidad y sería esclavizante para los niños que deben seguir estudiando", dijo.

En el evento, los niños, niñas y adolescentes trabajadores (NNATs) analizan, en mesas de trabajo, los cuatro puntos del plan de acción para operativizar el Programa de Atención Diferenciada para esta población.

El primer punto del plan consiste en que los NNATs tengan una credencial para que así se identifique a estos niños en el ámbito educativo.

La segunda propuesta consiste en la habilitación de la línea gratuita 800100050 para denuncias de discriminación y maltrato.

Asimismo, plantean un programa de apoyo pedagógico y becas de estudio para los menores trabajadores, informó el jefe de la Unidad Intra e Intercultural del Ministerio de Educación, Wálter Gutiérrez.

El Ministro de Educación remarcó que este encuentro de los NNAT busca adaptar un currículo educativo que fortalezca ciertas áreas o incorporar otras para que puedan desarrollar una actividad adecuada. En dicha reunión se discuten alternativas como la adecuación de días u horarios de clases para un niño que trabaja, apuntó Gutiérrez.

Para este objetivo, el Ministerio de Educación propondrá un plan de acción para operativizar un programa de atención diferenciada para los niños trabajadores.

Éste incluye un programa de nivelación y apoyo pedagógico para estudiantes trabajadores con rezago escolar. "Un niño trabajador improvisa y en ocasiones utiliza gradas u otros espacios para hacer las tareas, y puede ser que se proporcione una mochila o tablero", comentó el jefe de la UPIIP. Para reforzar el plan se trabajará en el programa de sensibilización dirigido a maestros y autoridades. Se propondrá un sistema de asignación de becas de universidades.

Con el compromiso del Estado de garantizar la educación concluyó el pasado sábado 30 de abril el II Encuentro Plurinacional en Educación de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores que se instaló el pasado viernes. El ministro de Educación, Roberto Aguilar Gómez, anunció una serie de acciones que fueron debatidas con los representantes de organizaciones de este sector.

"La condición de niño, niña o adolescente trabajador no puede privarles de su derecho a la educación. Si un niño no está insertado en el sistema educativo, vamos a trabajar juntos, con sus organizaciones, para incorporarlos al sistema educativo", afirmó la autoridad. Recordó que los niños con dificultades económicas o desventaja social "se ven en la necesidad" de trabajar desde temprana edad para apoyar a sus familias.

Como resultado del encuentro, el Ministerio de Educación emprenderá un proceso de adaptación de la currícula educativa vigente con el propósito de brindar condiciones favorables a los procesos educativos de la niñez y adolescencia trabajadora. Esta modificación se acompañará con la sensibilización de los maestros.

"Asimismo, se ha definido la creación de centros de apoyo integral pedagógico en diferentes zonas del país que apoyen los procesos educativos de estos niños", puntualizó Aguilar.

La especialización de docentes que se dediquen a la enseñanza de niños, niñas y adolescentes trabajadores también fue anunciada como un pilar fundamental de las políticas para garantizar la educación de este sector de la población.

El Gobierno de Evo Morales enviará a un grupo de niños trabajadores a Ginebra para Conferencia de la Organización Internacional de Trabajo (OIT)

El Gobierno de Evo Morales enviará a un grupo de niños trabajadores a Ginebra para defender ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT) una reciente ley que permite el trabajo infantil en Bolivia a partir de los 10 y 12 años que la organización, en cambio, fija a partir de los 14 años.

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, explicó el viernes que la delegación de niños irá a explicar que el Gobierno dictó una ley en 2014 con normas que protegen a los menores que trabajan en Bolivia.

Por ejemplo, los niños deben contar en sus labores con dos horas para estudiar, y quedan excluidas faenas pesadas como la "zafra" (o cosecha de caña de azúcar), entre otras normas. El código laboral para el trabajo infantil permite que los menores desde los 10 años trabajen en el entorno familiar, y desde los 12 años, para terceros.

El viaje está motivado porque Bolivia figura entre los países que ratificó el Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de 14 años de admisión laboral.

"En la OIT va haber una evaluación del código niño, niña (de Bolivia). No sólo lo han cuestionado, no lo reconocen y están poniéndolo en una situación de llamada de atención a Bolivia. En Ginebra se va a tomar la decisión si se sanciona o no internacionalmente a Bolivia", mencionó Aguilar.

"Tenemos que prepararnos de manera conjunta porque internacionalmente se cree que es lo peor que ha podido hacer Bolivia para los niños trabajadores y por eso necesitamos mostrarle que no es una violación de los derechos de los niños sino más bien se quiere normar y velar por los niños que trabajan", agregó el ministro Aguilar.

El jefe de la Unidad de Políticas Intracultural, Intercultural y Plurilingüismo (UPIIP), del Ministerio de Educación, Wálter Gutiérrez, dijo que los mismos niños trabajadores pidieron asumir su defensa. "Llevarán una propuesta. También se hará reuniones con los ministerios de Trabajo y de Justicia para sustentar nuestra posición y defender el Código 548".

Lizeth Castro, de 16 años de edad, coordinadora nacional de la Unión de Niños y Adolescentes Trabajadores de Bolivia, llevará junto con otros niños la experiencia de los menores bolivianos. La adolescente comentó que esta ley es un avance para el sector ya que les puede ofrecer condiciones para trabajar. "Queremos que se nos escuche. Esta ley, la hemos pedido al Gobierno porque nuestra realidad es diferente. Acá en Bolivia los niños trabajamos desde pequeños, no podemos negar nuestra realidad y la ley establece eso y norma que no se nos explote", explicó. El viaje a Ginebra está previsto para fines de mayo para asistir a la 105ta Conferencia Internacional del Trabajo, del 30 de mayo al 10 de junio 2016.

Políticas emancipadoras de consenso con los "actores directos"

El Gobierno nacional está elaborando la respuesta a las observaciones efectuadas por la Unicef y OIT respecto de la norma que permite el trabajo infantil desde los 10 años, informó el ministro de Educación, Roberto Aguilar.

De acuerdo con la autoridad de Educación, la respuesta será presentada en la reunión de mayo a realizarse en Ginebra, Suiza.

Aguilar sostuvo que la norma fue de consenso con los "actores directos", niñas y niños trabajadores, que el Estado lo asumió y respaldó, porque no fue fruto de la "presión".

"Se están preparando documentos, testimonios y se llevará a un grupo de niños trabajadores para que hagan conferencias paralelas y ellos puedan exponer que este no es un tema de arbitrariedad del Estado", dijo.

Asimismo, sostuvo que el poder visibilizar el trabajo infantil establece emitir sanciones contra quienes hacen mal uso de la flexibilidad laboral.

"En otros países no se cumple, porque hay niños esclavizados, niños ocultados en condiciones inhumanas", afirmó Roberto Aguilar a Cambio.

Fuente: Cristiano Morsolin. ALAI

COLOMBIA

"EL GOBIERNO DE SANTOS ES UNA CONTINUACIÓN DEL MODELO NEOLIBERAL QUE EN COLOMBIA YA LLEVA UN CUARTO DE SIGLO"

Entrevista a Renán Vega Cantor

Mario Hernández: Se cumplen 50 años de la caída en combate de Camilo Torres Restrepo, el cura que había nacido 37 años antes, un 3 de febrero, en el seno de una familia distinguida de Bogotá. Camilo Torres era sociólogo, sacerdote, político, cursó sus estudios en la Universidad de Lovaina donde tuvo la oportunidad de conocer a los curas obreros franceses que inspiraron el Concilio Vaticano II y la Doctrina Social de la Iglesia. De regreso a Colombia conoce a Rolando Fals Borda y juntos fundan el Departamento de Sociología en la Universidad Nacional. En el Ministerio de Educación impulsa el Movimiento de acción

comunal que buscaba promover la autogestión y organización comunitaria y en el INCORA impulsó la reforma agraria. ¿Qué significado tiene en la actualidad, a 50 años de su caída en combate, la figura de Camilo Torres?

Renán Vega Cantor: Camilo Torres es un personaje que ha trascendido las fronteras colombianas. Se podría decir que es patrimonio del movimiento revolucionario y anticapitalista del mundo. En el momento en que muere en combate, hace 50 años, él se anticipa a muchas cosas de su época, vive en los turbulentos años '60 que tanto transformaron al mundo y que en Colombia también tienen incidencia. Se anticipa a la Teología de la liberación, al diálogo entre marxistas y cristianos, a empuñar las armas como una decisión ejemplar para demostrar cómo se combatía al capitalismo.

Estos son hechos muy importantes, además de toda la agitación social que realiza, porque la decisión que toma de empuñar las armas es casi obligada, es resultado de la persecución a la que se ve sometido cuando se convierte en un agitador muy importante en el año '65. Moviliza masas en todos los lugares a los que va en Colombia y esto empieza a ser visto con preocupación por las clases dominantes y el Estado que lo empiezan a acosar e incluso a amenazar. Pero también es perseguido por las jerarquías católicas de Colombia que son profundamente retrógradas y en los años '60 eran uno de los puntales de la dominación.

Cuando muere, demuestra en la práctica lo que él llamaba "amor eficaz", término que inventó para hacer referencia al compromiso verdadero de un cristiano. Camilo decía que un cristiano no era discursivo ni retórico, sino que era real, participando en las luchas de los pobres, construyendo la solución de sus problemas, señalando las causas de las desigualdades. Entonces, Camilo Torres tiene una agenda muy radical para la década de los '60 que lo lleva a tomar la decisión que tomó.

Además, es el primer sacerdote que muere en América Latina empuñando las armas y participando en el movimiento guerrillero. De ahí en adelante Camilo se convierte en un símbolo que guía y alimenta luchas populares en Colombia en distintos órdenes y en un referente para el resto del mundo.

Cincuenta años después lo que habría que examinar es el legado y la vigencia del mensaje teórico y práctico de Camilo Torres, cuánto ha cambiado Colombia. Me atrevería a decir que prácticamente nada, hoy la sociedad colombiana en términos estructurales, de desigualdad, injusticia, de polarización entre pobres y ricos, vive en las mismas condiciones que conoció Camilo a mediados de la década del '60. Tenemos una desigualdad marcada, tenemos el poder de los grandes medios de comunicación que calumniaron y desprestigiaron a Camilo Torres, tenemos las fuerzas represivas del Estado, la organización de grupos paramilitares. Todo eso ya se empezaba a vivir en la época de Camilo Torres. La intolerancia que caracteriza a la sociedad colombiana y a sus clases dominantes, la intolerancia religiosa, todas esas cosas siguen presentes en la sociedad colombiana de hoy, por lo cual podemos decir que el mensaje de Camilo Torres es muy actual, tiene mucho que decirles a los colombianos de hoy, aunque muchos de ellos no lo conozcan ni sepan quién fue Camilo Torres Restrepo.

M.H.: Al respecto un tema específico, ¿qué fue el Frente Unido del Pueblo vinculado a la labor política y teórica de Camilo Torres?

R.V.C.:El Frente Unido del Pueblo fue una propuesta muy importante y muy original de Camilo Torres. Como dijo usted al principio, Camilo venía de una familia burguesa, estudió en colegios aristocráticos, fue seminarista y luego sacerdote, en una formación ideológica, política y cultural bastante conservadora. Pero Camilo tenía una increíble sensibilidad social y eso lo llevó casi por sus propios medios a relacionarse con otros sectores, y a comprender en la década del '60 el carácter injusto y antidemocrático del capitalismo existente en Colombia. A raíz de eso se dio cuenta de que era necesario aglutinar a las fuerzas afectadas por ese capitalismo y esa estructura desigual de la sociedad colombiana y eso lo llevó a proponer la creación del Frente Unido del Pueblo. Con una plataforma mínima pero muy importante, donde decía que debían participar todos los sectores sociales para crear un frente de unidad que enfrentara al boque de poder, al Frente Nacional, como se llamaba a la estructura dominante de Colombia de ese momento donde liberales y conservadores se turnaban en el manejo de la política.

En 1965 hace la propuesta, funda un periódico que lleva ese nombre “Frente Unido del Pueblo” y publica varios números. Genera una movilización sin precedentes en la sociedad colombiana, que solo se puede comparar con lo sucedido en la década del '40 con Jorge Eliecer Gaitán. Y esto asusta realmente a las clases dominantes de este país, que un sacerdote pudiera tener ese carisma, llegar tan directamente a importantes sectores de la población.

Camilo le habla a todos los sectores sociales, les da un mensaje a los estudiantes, a los comunistas, incluso a las Fuerzas Armadas, a distintos sectores sociales, con la perspectiva de armar un frente unido donde se incorporaran todos los sectores sociales golpeados por el Frente Nacional. Ese proyecto de unidad se dirige principalmente a las izquierdas de esa época y debería ser recogido por las izquierdas de nuestro tiempo, rompiendo con sectarismos para llegar a acuerdos sobre aspectos fundamentales, más allá de diferencias tácticas o coyunturales.

Esta es una oportunidad histórica

M.H.: El pasado viernes 21 de enero hubo un encuentro aquí en Bogotá de representantes del Polo Democrático, la Unión Patriótica, el Partido Alianza Verde y progresistas, entre otros, que se reunieron con la idea de construir un frente común de cara a la coyuntura y a las próximas elecciones. ¿Qué opinión te merece este encuentro?

R.V.C.: Con independencia de las apreciaciones que algún sector político pueda tener sobre la eventual firma de un acuerdo que le ponga fin al conflicto armado entre el Estado y las FARC, hay que decir que esta es una oportunidad histórica, no es algo que se presente todos los días y crea nuevas condiciones de lucha política, potencia la acción política alternativa. Pero para que esa potencia se convierta en realidad, es necesario que los sujetos sociales que representan voces alternativas o disidentes, se organicen y aprovechen esa coyuntura. Me parece una oportunidad para que las izquierdas de Colombia dejen de lado muchas diferencias, que suelen ser puramente electorales y ponerse a pensar en la construcción de un programa más de fondo, más sustancial en estas nuevas condiciones.

Uno desearía ser optimista, que las izquierdas históricas existentes aprovecharan esta coyuntura, pero eventos recientes me hacen dudar por las rencillas que se repiten en la mayoría de los casos, son terriblemente limitadas porque son principalmente de tipo electoral. No creo que en una coyuntura como la que se está presentando y las nuevas condiciones que genera, simplemente tengan como objetivo fundamental lo electoral. No digo que lo electoral no pueda ser un instrumento, pero estamos pensando en construir un bloque de poder alternativo que va más allá, que requiere volver a pensar en las reivindicaciones de distintos sectores, volver a pensar en el sindicalismo, en el movimiento campesino, en las luchas de los estudiantes. Que la o las izquierdas tengan mucho que decir frente a eso y participen en esas luchas, porque lo que ha sucedido en Colombia durante los últimos años es una terrible disociación entre lo social y lo político.

M.H.: El pasado 2 de febrero se reunieron 46 organizaciones sociales para plantear la iniciativa de un paro nacional, criticando la próxima reforma tributaria y a las privatizaciones, principalmente centrándose en el acueducto de Bogotá, en la situación de la industria petroquímica y en el sector educativo de la capital del país. ¿Es posible que esta iniciativa se concrete en lo inmediato?

R.V.C.: Hay condiciones muy favorables para la lucha social en estos momentos en Colombia. Precisamente como decía antes, está cambiando el ritmo de la economía colombiana, en términos macroeconómicos formales, la economía colombiana tuvo muchas divisas provenientes principalmente de su modelo minero exportador. Dado el cambio mundial, por la caída de los precios de esas materias primas, tenemos una situación contraria a lo que hay que agregarle que el gobierno de Santos que tanto habla de paz, en la vida real es una continuación y una radicalización del modelo neoliberal que en Colombia ya lleva un cuarto de siglo.

Esto se da en todos los terrenos, por ejemplo, respecto a las privatizaciones, las del gobierno de Santos son la continuación de lo que ha sucedido en estos últimos años, y la privatización de una empresa como Isagén se inició durante el gobierno de Uribe, no se pudo completar y se culmina durante el de Santos.

Esto sucede en todos los frentes, la neoliberalización de la educación es otro ejemplo, el gobierno de Santos impulsa proyectos que favorecen la educación privada, por ejemplo, de la educación superior universitaria. Hay un proyecto que se llama "Ser pilo paga" que significa la transferencia de recursos del Estado a las universidades privadas en lugar de darle ese dinero a las públicas. Son millones de pesos que serán transferidos a las universidades privadas del país.

Con respecto a las tierras se acaba de firmar un decreto para las llamadas "zonas agroindustriales" para favorecer al capital agrario de las multinacionales y del capital financiero nacional, en contra de los campesinos, pese a que uno de los elementos centrales de cualquier proceso de paz en Colombia es el de la reforma agraria.

Están creadas todas las condiciones objetivas para una movilización, pero también se necesita pensar en las condiciones subjetivas, en los niveles de organización y de movilización de los sectores populares. Y si se llegase a cuajar algo en ese sentido, podría pensarse en la posibilidad de un paro, porque todos los elementos están, desde el punto de vista de la situación económica y social.

M.H.: Inclusive un dato estadístico señala que la movilización de los trabajadores colombianos en la actualidad es cuatro veces mayor que hace diez años. Al mismo tiempo esto se vincula a que en días recientes hubo una represión contra trabajadores judiciales en el centro de Bogotá y con otras estadísticas que señalan que desde 1997 se han producido casi 14.000 violaciones a la vida, a la libertad, a la integridad contra sindicalistas y de esas violaciones, 3.089 son homicidios. Al menos esto es lo que se señaló en el Encuentro contra la criminalización de la protesta sindical y social que se realizó en noviembre del año pasado aquí en Bogotá. A lo que se agrega una guerra jurídica en el sentido de la declaración de ilegalidad de las huelgas, de las 1.623 protestas registradas desde 2010 el 41,5%, o sea, 675 han sido entorpecidas por medidas judiciales que las han declarado ilegales. Dicho esto, ¿cuál es la situación actual que atraviesa el movimiento sindical y obrero en Colombia?

R.V.C.: Ese movimiento es víctima, como ningún otro, de la represión y el asesinato. Nosotros tenemos el dudoso mérito de ser el primer país del mundo en asesinato a dirigentes sindicales. La cifra que usted señala es producto de investigaciones ligadas a los trabajadores, y es una realidad cotidiana que nosotros vivimos. Ser aquí dirigente sindical es un peligro público para la persona que ejerce esa actividad y se ha convertido casi en sentido común el asesinato de dirigentes sindicales. El modo de ver esto es esa contrainsurgencia de la que hablaba al principio de esta entrevista, y es que no se permite ni se tolera ninguna reivindicación social, cualquiera sea la reivindicación y por limitada que fuese, inmediatamente es calificada como producto de acciones terroristas y desestabilizadoras, incluso hay todo un lenguaje codificado que se utiliza para calificar a todo este tipo de protestas. Eso en el gobierno de Santos, a pesar de que tanto se habla de paz, no ha cambiado.

Tal vez uno de los momentos represivos que más se dio a conocer a nivel internacional fue lo que sucedió en el año 2013, cuando fue brutalmente reprimido el Paro nacional agrario, que incluso Santos llegó a decir en una afirmación cantinflesca que no había paro mientras el país estaba paralizado casi como en ningún otro momento. Aquí hay una política contrainsurgente, de rechazo a la protesta social, de rechazo a los trabajadores y desde el Estado se da desde varios frentes, por un lado, la represión directa y brutal que siempre deja heridos, muertos y personas detenidas; pero también hay una persecución jurídica que consiste en colocarle trabas legales a la protesta.

Prohibir la protesta en los servicios públicos, siendo éstos aquello que se considera vital sin importar la propiedad, entonces un periódico como El Tiempo o un canal de televisión como Caracol, son considerados servicios públicos, por lo tanto, en ellos no podrían haber huelgas, si existieran trabajadores organizados y sindicatos, porque sería calificado por los jueces como una actividad ilegal.

Es bueno para que sea estudiado por sindicatos y abogados laborales en otros países, cómo ha evolucionado de manera negativa la legislación laboral en Colombia. Desde 1918 cuando se presentó una primera oleada de huelgas el Estado colombiano emite los primeros decretos en su contra, y ahí ya aparece la idea del servicio público que en ese momento estaba restringido a los

lugares donde se estaban dando huelgas, que eran los puertos, los ferrocarriles, las empresas de transportes. Pero desde ese año hasta el día de hoy, esa idea de servicio público se ha ido generalizando y cubre prácticamente todos los sectores de la actividad económica del país. En la realidad es imposible hacer huelga porque todo es considerado servicio público, así sea de propiedad privada, como sucede con empresas petroleras porque el petróleo es considerado un servicio público esencial. Si ese negocio lo usufructúa una multinacional y los trabajadores hacen paro, lo más seguro es que de manera inmediata se declare prohibida por ser servicio público.

Otro elemento que conspira contra la organización y que hace más difícil la lucha en Colombia es la paramilitarización, no es solamente la represión por parte del Estado, sino las amenazas, el acecho, el acoso y también las acciones criminales por parte de sectores organizados por las empresas, por los terratenientes y comerciantes para impedir la organización de obreros, campesinos y trabajadores. Es tristemente célebre la intervención de empresas como Coca Cola, Nestlé y otras multinacionales directamente responsables en el asesinato de dirigentes sindicales, ellos han financiado y organizado grupos paramilitares para que maten a los trabajadores.

Todo este es un contexto que debe transformarse a la hora de hablar del fin del conflicto armado en Colombia, porque la lucha social debe desenvolverse por muchas causas en donde se rompa con esa lógica represiva del Estado colombiano de prohibir la movilización, aunque formalmente en la ley exista su autorización y se diga que este es un país democrático en el que se respeta la libertad de pensamiento y de organización.

M.H.: Al respecto estaba consignando el caso de Húbert de Jesús Ballesteros Gómez, que en agosto de 2013 integraba la comisión de negociación del Paro nacional agrario y popular, la movilización agraria más importante que se ha dado en los últimos 30 años en Colombia y luego fue detenido.

R.V.C.: Detenido y está condenado a 15 años de cárcel.

Estamos llegando al fin de un ciclo de ficticia prosperidad para la clase media

M.H.: Hiciste referencia en dos oportunidades a la situación económica del país. Hay algunos datos preocupantes, la caída del precio del petróleo ha afectado fuertemente la caída del presupuesto fiscal, 5.45 billones de pesos de los cuales el presupuesto en regiones bajará en 3.4 billones, lo que representa un 30.8% del presupuesto asignado.

Otro dato es el descenso de las ventas externas durante 2015 que se ha conocido por estos días, casi un 35%. Frente a lo cual el gobierno prepara una reforma tributaria, entre otros aspectos que han trascendido de esta reforma, se habla del aumento del IVA, e inclusive dentro de esta visita que se hizo a Estados Unidos, donde se reunieron los Presidentes Obama y Santos también hubo reuniones con funcionarios económicos por parte de las principales calificadoras de riesgo, que amenazan con bajar la nota crediticia de Colombia en la medida que el gobierno no equilibre las cuentas fiscales. Este fue el mensaje que dejaron claro en Washington, al Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santa María, las calificadoras de riesgo. ¿Qué podés agregar a estos elementos que tienen que ver con la situación económica que atraviesa Colombia?

R.V.C.: Me parece que esa es una exposición bastante completa de los indicadores. Lo que puedo agregar es que esta situación coyuntural es el resultado de una decisión de mediano y largo plazo que se tomó hace ya 25 a 30 años y que significó desindustrializar al país y optar por convertirlo en un país exportador de materias primas.

En términos estructurales de largo plazo, creo que esa es la explicación básica para entender lo que está pasando en el momento actual. Aquí, como ha sucedido en varios países de América Latina, incluso en países con distintos regímenes políticos, se consolidó la venta de materias primas, en nuestro caso principalmente mineras. La balanza comercial de Colombia, encuentra que los productos que más generaban y generan ingresos a la economía son el petróleo y el carbón; el café que durante mucho tiempo fue el principal producto, hoy es el tercero o cuarto en esa balanza comercial.

Ese crecimiento que se presentó entre 2001 y 2010 se debió a los altos precios de las materias primas. Cuando caen los precios de las materias primas, inmediatamente se ve el efecto negativo que produce que un país dependa del sector exportador más tradicional, el primario. El ejemplo del petróleo es crucial, hoy se cotiza a menos de 25 dólares el barril de petróleo colombiano, mientras que en un momento llegó a cotizarse a 90 dólares, estamos hablando de una caída catastrófica que se va a intensificar en las próximas semanas. Gran parte de lo que se había presupuestado para los años por venir, estaba relacionado con el sostenimiento de esos ingresos con un precio del petróleo elevado, pero no solamente sucede con el petróleo, también con el precio del carbón, del níquel, que han caído internacionalmente. Colombia es el principal exportador de carbón de Latinoamérica, los principales compradores son Estados Unidos y Canadá. Entonces, esto va a afectar a la economía colombiana, pero hay un factor adicional que en el listado que usted señala no se nombra y es el de la devaluación.

Resulta que el peso colombiano estuvo revaluado de manera artificial durante casi el mismo período de aparente prosperidad económica que estábamos señalando. Lo que permitió la revaluación del peso colombiano fue que este país se inundara de mercancías y tecnología producida por el capitalismo mundial, lo que incluso permitió darle cierta base social al modelo neoliberal en las ciudades, porque la clase media empezó a tener acceso al automóvil, que era un bien suntuario en otra época, a todo tipo de artefactos electrónicos. Colombia es un país inundado de celulares, es el país de América Latina en el que más celulares hay. Esa mercadería ingresó al país a un relativo bajo precio, un precio artificial que ahora está desapareciendo, entonces ahora todos esos aparatos, automóviles y todo lo que el país compró en el exterior, que es casi todo, porque aquí se compra casi el 90% de los productos agrícolas que se consumen, ahora está llegando encarecido.

Hace un año el precio del dólar era de 2.600 pesos, hoy está a 3.400. Es decir que estamos llegando al fin de un ciclo de ficticia prosperidad para la clase media. Esta clase media, además de no poder comprar más por la suba de precios, está terriblemente endeudada. Este es otro elemento de la coyuntura importante de resaltar, no solo por sus implicaciones económicas, sino porque sabemos que tiene implicaciones políticas, sociales y culturales también. Esa clase media que nunca ha sido fuerte en Colombia, pero que tuvo un momento de despegue en los últimos 12 años, ha llegado a un límite; entonces habrá que ver qué sucede con esos sectores cuando ya no tengan cómo pagar la tarjeta de crédito, la cuota del automóvil, la del departamento o no tengan cómo cambiar de celular, etc. Es un impacto que no se ha estudiado con suficiente énfasis, porque pone en discusión el agotamiento de un modelo que había dado algunas migajas a esa clase media.

El ser humano nunca renuncia a la lucha y la esperanza sirve para buscar salidas

M.H.: En uno de tus últimos trabajos, de diciembre, publicado en Rebelión.org, te referís a una categoría que entiendo es de tu autoría, que es la de “tecno-fascismo”.

R.V.C.: Este término lo he venido usando durante los últimos años en distintas publicaciones, muy preocupado por el impacto que la tecnología tiene en el mundo contemporáneo sobre la gente. Me importa analizar a la tecnología no como una fuerza neutra, como generalmente se suele hacer, sino como un componente más de nuevas formas de dominación. A partir de esa preocupación, me llama la atención que diversas clases sociales se hayan rendido acríticamente a la tecnología, incluyendo a grandes sectores de la izquierda mundial, partiendo de una consideración bastante discutible de las fuerzas productivas, hablando en terminología marxista. Y siendo que las fuerzas productivas nos vayan a conducir finalmente a la liberación y a un desarrollo humano teniendo en cuenta nuevas investigaciones y nuevos productos en el ámbito de la tecnología. Sin embargo, viendo la realidad uno se encuentra con que hay sectores profundamente retrógrados en términos políticos que utilizan las tecnologías más desarrolladas para sus proyectos. Y en ese sentido es que refuerzo la idea del tecno-fascismo, que supone pensar a ese sector no solo como completamente retrógrado, conservador y reaccionario, que lo es, sin estar desligado del uso de las tecnologías más modernas y sofisticadas, incluso como nuevas formas de control.

Sería importante volver a estudiar el mismo nazismo, porque cuando se lo estudia hay una tendencia que dice que era lo más opuesto a la ciencia y a la modernidad, pero investigaciones contemporáneas muy serias han demostrado que el nazismo ha sido la variante más radical de la

modernización capitalista, incluso en el ámbito tecnológico, a punto de que la tecnología se aplicó a la muerte de millones de personas en los campos de concentración, por ejemplo, el trabajo allí era la muerte industrial, la muerte programada. Los hornos crematorios usados para matar personas estaban programados industrialmente. El mismo fascismo supuso una particular utilización de la tecnología, por eso pensadores como Benjamin y su crítica al fascismo, a la socialdemocracia y a distintos sectores de la izquierda de la época que decían que había que romper con ese culto acrítico a las fuerzas productivas, que había que ver a la tecnología como un elemento contradictorio de lucha y de combate. A mí me llama hoy la atención cómo la tecnología es un dispositivo de control absoluto de la población y vigilancia las 24 horas por medio de distintos mecanismos. Las ciudades están llenas de cámaras de video que registran todos los movimientos de las personas, en el transporte público pasa lo mismo, el teléfono celular es un elemento de control. Así sucesivamente podríamos enumerar muchos ejemplos y por eso digo que la izquierda debe repensar la tecnología.

M.H.: ¿Hay lugar para la esperanza?

R.V.C.: Digamos que por supuesto, yo creo que el ser humano nunca renuncia a la lucha y creo que eso es lo que nos diferencia de los demás animales, a pesar de tener nuestra parte de animalidad.

La búsqueda de nuevos caminos y soluciones a los problemas tiene que seguir siendo parte del horizonte humano. Recuerdo lo que decía Eduardo Galeano cuando le preguntaban para qué servía la utopía y decía que servía para caminar. Me parece que lo mismo podemos decir de la esperanza, el principio del que tanto hablaba el filósofo Ernst Bloch es que la esperanza, a pesar de las condiciones duras en las que nos encontremos, sirve para buscar salidas. Lo que pasa es que a uno le toca el papel más difícil, que es el de mostrar los problemas, esa es una característica fundamental del pensamiento crítico, pero también bosqueja y postula salidas a pesar de las dificultades.

M.H.: ¿Algo para agregar?

R.V.C.: Simplemente saludar a los medios con los que usted trabaja y a los lectores y oyentes que lo siguen. Porque me parece muy importante la labor que realiza. Si hay algo que necesitamos hoy es abrir nuevos espacios de pensamiento y de crítica ante el monopolio abrumador que tienen los medios de comunicación mundial y a escala nacional. Este también es un problema que estamos afrontando y vamos a afrontar en Colombia en el futuro inmediato, porque uno de los grandes responsables de la guerra y la tragedia que los colombianos hemos vivido en las últimas décadas, son los grandes monopolios de la información. Ellos se oponen al proceso de paz, viven una diabolización permanente de las voces disidentes, que necesitan poder expresarse si queremos construir un país decente, donde podamos hablar y se nos permita pensar distinto. En esa labor los medios de comunicación alternativos son fundamentales, por eso creo que el papel que usted realiza Mario, en Buenos Aires y en Argentina, tiene mucho valor.

Mario Hernandez - Rebelión

GUATEMALA

LOS ROSTROS DEL AGUA

El año pasado dudé de la legitimidad de las manifestaciones por corrupción y lo expuse abiertamente en mis artículos, sin embargo como muchos también las apoyé porque más allá de la clase media clasista y racista que infestaba las plazas, y que solo se escama cuando le tocan el bolsillo también estaba el pueblo real. Levanté mi voz desde el extranjero uniéndola a la de los parias que sin posar estaban ahí, como han estado siempre sin que los arreen y sin pedir a cambio reverencias.

Mucho se ha dicho de esas manifestaciones, fueron tantos los que se colgaron del momento para beneficio personal. Entre estudiantes, docentes, empresas oligárquicas, dirigentes sindicales.

Artistas, deportistas y candidatos a la presidencia. Tal es el caso de Jimmy Morales que aprovechó para subirse a la ola y es hoy en día el mamarracho que desde la poltrona simula ser el presidente.

Que nadie se equivoque, no fue la masa de clase media que infestaba las plazas la que logró derrocar a Otto Pérez Molina, lo que sí es cierto es que fue utilizada por la embajada de Estados Unidos y la oligarquía guatemalteca para sacudirse al ladronzuelo que entre otras virtudes es genocida y así colocar a otro igual (o peor por solapador) de lacayo. Y no lo digo yo, los resultados de esas manifestaciones están a la vista y hoy por hoy Guatemala sigue cayendo en un abismo sin fondo.

Fue en tiempos de “democracia” claro está, a la clase media no hay que obligarla, solo hay que decirle que hay beneficios para los marginados del sistema y vota en contra.

Fue más la bulla de los clase medieros, de la burguesía y del estudiantado que de pronto se sintió digno y se disfrazó de revolucionario para acaparar las cámaras de televisión de los medios internacionales y salir en primera plana. Aprendieron frases, versos y pintaron consignas de mártires guatemaltecos. No faltaron quienes entraron en trance y hablaban en lenguas y trababan los ojos, y se devanaban en el suelo con tal de una foto o una entrevista. Algunos se autoproclamaron nietos de Árbenz. Y no faltó quien se creyera heredero del Che Guevara.

Estudiantes de universidades privadas de pronto se disfrazaron de pueblo para recibir aplausos. Universitarios San Carlitas que dijeron “USAC es Pueblo” pero que en el Juicio Sepur Zarco dejaron solas a las mujeres indígenas que denunciaron haber sido esclavas sexuales por parte del ejército en tiempos del Conflicto Armado Interno. Mismos que en la Huelga de Dolores le pedían a gritos a Jimmy Morales que firmara la ley de la Pena de Muerte. ¡Habrás visto...! Entonces, ¿cuál reestructuración del país?

Y no digamos periodistas que en las manifestaciones se maquillaron de dignidad pero que en tiempos de Jimmy solapan con su manipulación mediática toda injerencia estadounidense y todo asalto oligárquico. Y desde el pedacito de país lanzan pestes a los gobiernos progresistas de Suramérica y aplauden el avance neoliberal.

A un año de aquella farsa, viene la Marcha por el Agua. Más allá, lejos de la mediocridad, de la avaricia y del oportunismo están los pueblos indígenas y los campesinos que realizaron una marcha de 11 días en los que caminaron más de 260 kilómetros, exigiendo una regulación del agua, que liberen los ríos que están en propiedad del sector empresarial, exigen que los diputados legislen al respecto. Fueron miles de campesinos los que caminaron bajo el sol y en el calor abrumador del verano guatemalteco. Mujeres cargando a sus niños en sus espaldas, amamantándolos mientras caminaban kilómetros y kilómetros. Pidiendo lo que por derecho les corresponde. Siempre leales, siempre honestos, siempre peleando los derechos para todos. ¿Qué clase media los fue a acompañar? ¿Qué masa amorfa caminó con ellos? ¿Qué estudiantado universitario marchó con ellos?

Los dejaron solos, como siempre. Cuando el año pasado fueron miles los campesinos que perdieron días de trabajo viajando desde los departamentos a la capital solventando sus gastos, para acompañar a la horda clase mediera en las manifestaciones por corrupción, porque ellos saben que la unión hace la fuerza. Ellos siempre están pase lo que pase.

En la Marcha por el Agua llegaron a la capital con sus pies reventados de ampollas, (muchos de ellos no tienen zapatos) con hambre y sed, sumamente cansados. Y unos que para la foto fueron a recibirlos a la entrada a la capital, les ofrecieron refrigerantes y realizaron ceremonias mayas. Les echaron porras y ahí murió la flor. Esa fue su participación y con eso sintieron que hicieron más que suficiente. Y les llamaban compañeros, hipócritamente.

Otros llegaron a la Plaza Central con cámara en mano y se tomaron fotografías que publicaron en las redes sociales, justo cuando les entregaban bolsas de agua y un pan con frijoles. Se sintieron dignos y le agregan frases de revolucionarios asesinados por el ejército. Qué lejos estamos los guatemaltecos de la conciencia, de la humanidad y de la solidaridad. Lejos de hacer las cosas por consecuencia política y sin robar cámara. Lejos de valorar las luchas de los otros que deben ser las nuestras porque nos involucran a todos.

No faltaron quienes yendo a manifestar el año pasado por corrupción, lanzaron insultos a través de las redes sociales a los pueblos indígenas que marcharon por el agua, acusándolos de haraganes y mantenidos. Culpándolos por el tráfico en la ciudad.

¿Reestructurar Guatemala? ¿Cuándo y cómo? ¿Con esa horda de hipócritas, con esa masa incongruente políticamente? ¿Con esas mentes colonizadas, con esas actitudes clasistas y con el racismo a flor de piel? ¿Con ese odio a los pueblos campesinos?

Lejos está Guatemala de florecer y que no insulten la lucha de los dignos diciendo que el país lleva un año de primavera. Que digan misa y que publiquen documentales, estudios y foto reportajes, las marchas por corrupción fueron a morir con el voto a Morales. Contra eso no hay excusa que valga.

No hay que buscar en ningún portafolio de clase media, de estudiantes universitarios, de líderes sindicales y oportunistas capitalinos; los rostros de la Marcha por el Agua están en ese pueblo marginado del que el guatemalteco capitalino y clasista se avergüenza. Que se cuelguen de ellos los que quieren, pero aunque intenten de todo no tendrán nunca la dignidad, el coraje, la identidad y la entrega de los que actúan sin posar desde la invisibilidad de la alcantarilla.

¿Otra Guatemala es posible con esa horda de oportunistas? Parece chiste pierde amigos de los que cuenta el Moralejo a la prensa internacional en butaca de la ONU.

Fuente: Ilka Oliva Corado. Rebelión

HONDURAS

CONATEL QUIERE DESMANTELAR LAS RADIOS COMUNITARIAS DEL COPINH

Transcurridos más de 50 días del asesinato contra la lideresa Berta Cáceres, las amenazas de seguimiento, hostigamiento y vigilancia hacia los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, (COPINH), se extienden hacia las Radios Comunitarias “Guarajambala” y “La Voz Lenca”, denunció la defensora de derechos humanos y también comunicadora social, Roxana Vásquez, de la Red de Defensoras de Honduras, este miércoles 27 de abril de 2016.

Con el escenario de violencia que enfrenta el COPINH es de suma preocupación la labor de los comunicadores y comunicadoras de sus radios, detalló Vásquez.

Agregó que desde antes del asesinato de Cáceres el pasado 03 de marzo se habían recibido varias notas, llamadas y visitas de miembros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, (CONATEL) ,con la finalidad de obstruir la labor de la organización para denunciar la construcción de la hidroeléctrica, Agua Zarca en el Rio Gualcarque.

A raíz del asesinato contra Berta Cáceres , la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), otorgó medidas cautelares tanto a su familia como a quienes integran el COPINH, acción que abarca también a los comunicadores y comunicadoras de los medios alternativos.

Contrario a esto, quienes ejercen la comunicación alternativa organizados en el COPINH, son objeto de vigilancia presencial y mediante el monitoreo de sus programas para que “sus voces sean conocidas y puedan ser identificadas no se sabe para qué fines” afirmó.

Una de las acciones que usan para perseguir a las estaciones de radio es por medio del cobro del canon (pago anual por usar el espectro radioeléctrico), pero ni siquiera les han adjudicado una frecuencia libre en la que puedan operar, detalló Vásquez.

Asimismo el ataque se evidencia con los cortes de luz en la zona donde opera “La Voz Lenca”, en la ciudad de La Esperanza. “La cortan por cinco minutos y regresa y esto genera daños a los equipos de transmisión de la radio”, sostuvo la Directora de la Red de Defensora “La Rojita”.

Luego de realizarse una serie de reformas a la Ley Marco de Telecomunicaciones desde el año 2012, en las que se democratizaría el espectro a favor de las radios comunitarias, el escenario hacia

ellas parece ser adverso, específicamente a las que denuncian la situación de criminalización y despojo de sus recursos naturales en sus comunidades.

En vida, Berta Cáceres denunció la intención de ciertos sectores de violentar la libre expresión e información del pueblo lenca. Para el caso en diciembre del año anterior denunció que el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez hizo un llamado durante una visita al Departamento de Lempira para “que no se organicen ni escuchen las radios comunitarias del COPINH”

Siempre mencionando el caso de La Voz Lenca, Roxana Vásquez mencionó que uno de los obstáculos impuestos desde CONATEL es que les asignaron una frecuencia que choca con la señal de Radio Victoria de El Salvador por ser zona fronteriza, “incluso ninguna de las radios se puede escuchar”, denunció.

La Comunicadora y defensora argumentó que por esta razón ellos-La Voz Lenca-“decidieron operar en la antigua frecuencia y a partir de allí el ente del Estado los hostiga mencionando que no deben operarla porque es ilegal”, a lo que se suma que desde CONATEL han puesto vigilancia sobre el contenido de la radio porque mantiene la denuncia permanente en la exigencia de justicia para Berta y la defensa de sus territorios.

Otro de los hechos contra la libertad de expresión hacia las radios del COPINH es que durante las reiteradas visitas hechas por CONATEL han insinuado a los comunicadores que utilicen cierta publicidad, hecho que la organización defensora del pueblo lenca ha dejado declarar que “no somos voceros del gobierno”, quieren irrespetar su concepto autónomo como emisoras comunitarias, sostuvo Vásquez.

Fuente: <http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/en/>

MÉXICO

LAS PATRONAS Y EL OBISPO RAÚL VERA RECIBEN LA “MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSIDAD VERACRUZANA”

El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, y el colectivo Las Patronas, que brinda ayuda a los migrantes, recibieron la Medalla al Mérito Universidad Veracruzana (UV) “por llevar la paz a una sociedad más que nunca necesitada de ella”.

La rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, hizo entrega de los galardones durante la inauguración del Foro Académico “Diálogos por la paz” en la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) 2016, celebrada ayer.

“En nombre de la comunidad universitaria les hago entrega de la Medalla al Mérito Universidad Veracruzana, institución que hoy lucha también por defender otros derechos humanos que habrán de contribuir en la edificación de la paz: los derechos de los jóvenes a una educación superior gratuita y de calidad”, destacó la rectora.

La UV, agregó, está empeñada en alcanzar la paz prácticamente desde el inicio de la actual administración, tendiendo puentes con personas que “aquí y allá empeñan su trabajo, su capacidad, su esfuerzo, su vida misma en la consecución de la paz”.

En su oportunidad, el obispo José Raúl Vera López dijo que recibía el galardón a nombre de las víctimas, a quienes los defensores de derechos humanos “tenemos el gusto de servir y de compartir la vida. Así es como recibo este reconocimiento que ustedes le dan, en mi persona, a tantas miles de personas que son quienes le van a marcar y le están marcando ya un camino distinto a este país y al mundo entero.”

En su breve mensaje ante una nutrida asistencia, el obispo sostuvo que las personas que son agraviadas con las violaciones a sus derechos humanos tienen que seguir siendo protegidas, y los derechos – añadió - deben ser defendidos.

En representación de Las Patronas, la medalla fue recibida por Guadalupe González Herrera, a quien el público brindó un cálido aplauso de pie que duró más de un minuto.

González Herrera expresó que el reconocimiento es en primer lugar “de Dios y de los migrantes, porque hicieron posible todas estas cosas que se han ido dando desde que inició”. La distinción, subrayó, “nos incita a seguir, es más responsabilidad y compromiso para todas, porque no es tan fácil, pero nos conmueve seguir haciendo lo que hacemos, pues todo se hace con mucho amor para ellos, porque sabemos todo lo que vienen pasando”.

Al concluir su mensaje, los asistentes brindaron otro aplauso para Norma Romero Vázquez, coordinadora de Las Patronas, así como Lorena Aguilar Hernández, Guadalupe González Herrera, Bernarda Romero Vázquez, Rosa Romero Vázquez, Mariela Nájera Romero, Leonila Romero González, Fabiola González Herrera, María Antonia Romero Vázquez, Karina Aguilar Romero, Karla Aguilar Romero, Julia Ramírez Rojas, Teresa Aguilar Hernández y Lilia Alvizar Barragán, todas integrantes del colectivo.

Fuente: Sara Lovera en <http://www.proceso.com.mx/>

NICARAGUA

ATENDERÁN A 200 MIL PERSONAS EN HOSPITAL DE NUEVA GUINEA

El Gobierno de Japón apoyará con USD 18.5 millones la construcción de un nuevo hospital en Nueva Guinea.

La Ministra de Salud doctora Sonia Castro, explicó que la construcción del sanatorio comenzará a inicio del 2017, infraestructura que tendrá 155 camas y beneficiará a casi 200 mil personas de los municipios de Nueva Guinea, El Rama, Muelle de los Bueyes y El Coral. Castro dijo que se atenderá a los habitantes de las comunidades aledañas de San Miguelito, El Almendro, San Carlos, Bluefields y Villa Sandino.

La funcionaria agradeció al Gobierno de Japón por el apoyo brindado al pueblo de Nicaragua. Explicó que la próxima etapa son los estudios, formulación, diseño y acabado para la licitación de la obra.

Por su parte el representante de Jica en Nicaragua, Hirohito Takata, expresó que con este proyecto se logrará acercar los servicios médicos a la población de cuatro municipios del Caribe Sur y algunas comunidades aledañas, que ya no tendrá que viajar grandes distancias para recibir atención especializada. Añadió que permitirá el ahorro en la economía familiar, lo que en alguna medida incidirá en la mejoría de las condiciones de vida de los beneficiados.

Takata recordó que desde 1991, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón trabaja de la mano con el MINSA en la ejecución de proyectos de cooperación técnica y financiera no reembolsable.

Señaló que es un honor poder contribuir al proceso de desarrollo de Nicaragua, en especial con proyectos como éste que tendrá impacto en una población históricamente desatendida.

En este hospital se brindará los servicios médicos de Gineco Obstetricia, Medicina Interna, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología, Pediatría, Cirugía Pediátrica, Nefrología, Fisiatría, Emergencia, Maxilofacial, Odontología, Imagenología, Laboratorio Clínico, Fisiológico y Patológico.

Además, contará con quirófanos, salas de recuperación, labor y parto, servicio de hospitalización y sala de neonatos, las que serán construidas y debidamente equipadas con insumos de calidad.

Fuente: <http://www.radiolaprimerisima.com/>

PANAMÁ

¿EL ATAQUE CONTRA MOSSACK Y FONSECA ES UN ATAQUE CONTRA PANAMÁ?

Comprendo y respeto perfectamente a los que piensan y sienten que lo ocurrido es un ataque contra Panamá. Con toda consideración disiento de este criterio. Consideramos que, lamentablemente

entiendo – y esto no resulta agradable – que los autores de la noticia le dieron el nombre a la filtración de documentos de “Panamá Papers” por dos razones. La primera es porque se utilizó similar nombre al que se le dieron a las primeras filtraciones de información que difundió en febrero de 2015, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación del caso del Banco HSBC de Suiza, ocurrida en febrero de 2015, a los que se le denominó con el nombre de aquel país: “Swiss Leaks” En segundo lugar porque es probable que les resultara más sugestivo y atrayente utilizar el nombre de Panamá, que, por ejemplo, “Mossack Fonseca Papers”. Desgraciadamente la firma Mossack y Fonseca tiene su sede principal en Panamá, en el centro del corazón bancario y financiero de la ciudad. Si bien es cierto que ha hecho sociedades de otras jurisdicciones (Delaware, Islas Vírgenes Británicas y otras jurisdicciones), para clientes de distintas partes del mundo y de diferentes y variadas actividades, el hecho de que la oficina de abogados principal esté en Panamá y que sus principales socios, Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, sean abogados panameños, que estudiaron sus carreras de abogados en universidades de Panamá, que obtuvieron su idoneidad para ejercer la abogacía en la República de Panamá, otorgada por la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, y ejercen la profesión desde Panamá, arrastra el nombre de la República de Panamá al escándalo internacional. Es obvio que a todos nos duele, pero el problema no es de la República de Panamá con el mundo. El problema es de Mossack y Fonseca con el mundo. En la medida en que los abogados e intermediarios financieros de la República de Panamá actúen correctamente y demuestren al mundo que la República de Panamá no es un refugio de corruptos ni de profesionales que amparan la delincuencia, se podrá rescatar el nombre de Panamá. Lamentablemente, las consecuencias de la actuación irresponsable del bufete Mossack y Fonseca nos ha llevado a retroceder en las gestiones que se habían hecho para salir de la lista gris donde nos había incluido el denominado Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como paraíso fiscal y país no cooperador, hecho que se había logrado, apenas pocas semanas antes, el 18 de febrero de 2016. Pero después del escándalo de los “Panama papers”, la República de Panamá ha empezado a sentir los coletazos y los efectos adversos del escándalo internacional. En este sentido, la República de Francia – una de las cinco potencias mundiales – de forma individual (lo cual no es buen presagio) decidió el pasado 8 de abril y como consecuencia de los “Panama Papers”, mediante un decreto que firmó el Ministro de Finanzas, Michel Sapin, y el secretario de Estado de Presupuesto, Christian Eckert, agregar a Panamá en la lista del año 2016 como Estados y territorios no cooperativos (Paraíso fiscal)

Hemos de reconocer el esfuerzo constructivo y bien intencionado del gobierno del Presidente Juan Carlos Varela y de su equipo gubernamental, que logró el pasado el 18 de febrero de 2016, que la República de Panamá fuera excluida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como paraíso fiscal. Doloroso es que todo el panorama y las consecuencias de la irresponsable actitud de Mossack y Fonseca nos indican que pudiera haber un retroceso en lo que tanto esfuerzo costó obtener.

No es esgrimiendo un nacionalismo extremo como podemos resolver esta difícil situación. Ni tampoco consideramos correcto que algunos utilicen el chauvinismo/nacionalista como método alternativo para defender a Panamá. Lo curioso es que muchos de los que defienden a la República de Panamá desde esa óptica nacionalista, en su mayoría son personas que han actuado con responsabilidad en sus asuntos financieros y que, deberían comprender que así como ellos han actuado con prudencia, con los controles necesarios en sus actividades financieras, así debieron haberlo hecho los señores Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack y su firma de abogados, cada vez que en el plano internacional vendían una sociedad. Panamá es un pequeño país en lo geográfico y en lo poblacional, pero inmenso y grande en el trabajo honrado, en el tesón y en el espíritu indoblegable de los panameños por desarrollar el Estado. Pero no nos dejemos empalagar por el nacionalismo a la hora de discernir y de comprender los desaciertos y los yerros que algunos han cometido porque, tal como acertadamente lo expresó el abogado Jaime Alemán, en un artículo de opinión (La Prensa, martes 5 de abril de 2016), Panamá se encuentra en la disyuntiva, de decidir entre “los negocios de algunos o los intereses del país” Y, sin duda alguna, debe prevalecer el interés de Panamá, no el de los ambiciosos.

Fuente: Italo Isaac Antinori Bolaños en <http://filosofiasociedadpanama.blogspot.com.es/>

PUERTO RICO

ENCERRONA PARA ESTADOS UNIDOS EN PUERTO RICO

A dos años de haber comenzado la ofensiva financiera para estabilizar el dominio colonial de Puerto Rico, basada en quitarle a los puertorriqueños la capacidad de resistir económica y políticamente, se acumulan errores que conducen a los propios Estados Unidos hacia una encerrona en el noreste del Caribe.

Pero en Washington se sigue intentando salvar la estrategia y no se nota mucho interés en la evaluación de los eventos que se han sucedido desde mayo de 2014, que permitirían revisar si el objetivo estratégico es alcanzable o si es hora de tomar otro camino.

Esa acumulación de errores y de obsesión por seguir adelante provoca que EEUU enfrente la posibilidad de salir derrotado, tanto si gana la desigual batalla de guerra financiera como si la pierde. Como ha ocurrido en tantas ocasiones con estrategias fallidas estadounidenses, el camino errado comenzó con una propuesta desde la comunidad de inteligencia dada a las preocupaciones en Wall Street.

Corría el mes de mayo del año 2014.

Luego de que en febrero el crédito de Puerto Rico había sido degradado al nivel “basura” o especulativo, la intervención del gobierno autonómico contra el Banco Doral –que al final fue liquidado por las autoridades financieras estadounidenses- levantó alarma en inversores de Wall Street. Se desató una campaña intensa que denunciaba al gobernador colonial como un dictador corrupto latinoamericano.

Entró en escena el economista y analista internacional Arturo Porzekanski, de reputación en los mercados financieros y que ha tenido vínculos de asesoramiento al sector militar y a los servicios de inteligencia a través del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. En un estudio monográfico, Porzekanski hizo un llamado urgente a la Casa Blanca y pidió acción para poner en cintura al gobierno puertorriqueño por el caso Doral, lo que concretizó luego, en octubre, con la propuesta de que se impusiera en Puerto Rico una “junta de control” a la manera en que se hizo en el Distrito de Columbia en 1995.

Diversas instituciones civiles que recibían fondos de Wall Street propagaron con intensidad la propuesta hasta que en abril de 2015 el influyente periódico The New York Times apoyó que la misma fuese estudiada. Días después, la propuesta fue planteada formalmente ante el tribunal de apelaciones del Primer Circuito de Boston por abogados que defendían bonistas en el caso en que se paralizó la nueva ley de quiebras de Puerto Rico, caso pendiente aún en el Tribunal Supremo de EEUU.

La propuesta fue recogida el 19 de junio, en una carta a todos sus colegas del congreso por Jeff Duncan, miembro del subcomité de asuntos hemisféricos. Duncan afirmaba que Puerto Rico se había salido de la ruta de la descolonización y que había que corregir su rumbo con la imposición de la junta.

Ese mismo mes de junio de 2015, el portavoz de prensa del presidente Barack Obama evitó contestar si la Casa Blanca apoyaba la imposición de la junta en el caso de Puerto Rico y se concentró en otras alternativas para atender su descalabro económico y fiscal. La evasiva se tradujo que en que medios noticiosos interpretaron que Obama descartaba la junta, pero la realidad era otra y se conocería públicamente varios meses después.

El 8 de julio se hizo pública la posición de la Unión Nacional de Contribuyentes de EEUU, a favor de imponer la junta y cuatro días después, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta, anunció en una reunión con bonistas en la sede de Citicorp en Nueva York que el gobierno autonómico puertorriqueño acogía la idea. La propuesta, cuyos detalles se conocerían en un plan que se hizo público en septiembre, fue que la junta fuese impuesta por el propio gobierno puertorriqueño, que aboliría así su propia democracia, pero reservaría poderes al gobernador, lo que resultó inaceptable para algunos vinculados a Wall Street.

Aún con esas objeciones, el gobernador Alejandro García Padilla reunió varias veces a los legisladores oficialistas para convencerles de que la junta era ya un hecho inevitable y que si Puerto Rico no la aprobaba, la impondría Washington. En esas reuniones, se llegó a decir que había que recordar que EEUU era capaz de invadir países para imponer su voluntad.

De hecho, poco después la Casa Blanca hizo pública su "hoja de ruta" sobre Puerto Rico y se incluyó la imposición de la junta por parte del Congreso, cuyos miembros se designarían en Washington. Ya en agosto, el Congressional Research Service había tomado nota de que se estaba planteando la designación federal de tal organismo.

En noviembre, las cámaras legislativas puertorriqueñas aprobaron la junta y el gobernador la convirtió en ley en diciembre, con lo que formalizó el derrocamiento oficial del sistema republicano de separación de poderes y gobierno electo, aunque hasta el día de hoy no ha designado a los miembros del nuevo organismo. Así pues, la ley sigue durmiendo, mientras en el Congreso se han presentado –desde ese mismo mes de diciembre- varios proyectos de ley para implantar la referida junta y la nueva posición pública del gobierno de Puerto Rico es que "los que plantean que se puede lograr la restructuración de la deuda sin algún tipo de junta, están vendiendo sueños".

Los medios noticiosos en Puerto Rico han desatado por su parte una fuerte campaña sobre la junta, que se considera inevitable y sobre la que se asegura tiene el apoyo de la inmensa mayoría del país, aunque no se ha presentado una sola encuesta ni se ha producido consulta alguna al electorado. La campaña periodística, en la que se evita hablar de "dictadura", es la otra cara de la moneda de la que se ha desatado en los propios EEUU en contra de la junta y de las demás medidas propuestas en el Congreso para atender la crisis de Puerto Rico.

La propuesta ha fracasado en tres intentos en el Congreso y ya se forma oposición popular en Puerto Rico.

Fuente: Jesús Dávila. ALAI

VENEZUELA

MAS DE CUARENTA ORGANIZACIONES ESPAÑOLAS SUBSCRIBEN MANIFIESTO POR VENEZUELA BOLIVARIANA.

MANIFIESTO POR VENEZUELA BOLIVARIANA

Jornada mundial de solidaridad con la Revolución Bolivariana.-19 DE ABRIL DE 2016

Ante la escalada de las agresiones imperialistas contra el pueblo venezolano y su legítimo gobierno, encabezado por el Presidente Nicolás Maduro, las organizaciones y colectivos de solidaridad con la Revolución Bolivariana estamos en la tarea de articular esfuerzos para llevar adelante acciones que sirvan para combatir tal arremetida. En este sentido nos incorporamos al llamado del Foro de Sao Paulo para que el 19 de abril sea una jornada mundial de solidaridad con Venezuela.

En este proceso de agresión se enmarca la renovación de la Orden Ejecutiva dictada por el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, que insiste en declarar a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política externa de los Estados Unidos. La agenda de desestabilización llamada "Operación Venezuela Freedom-2" firmada por el almirante Kurt Tidd, actual jefe del Comando Sur, fechado el 25 de febrero de 2016 donde queda claro que no se contempla, en realidad, ninguna "salida electoral" contra el gobierno de Nicolás Maduro. La salida, de concretarse, sería violenta.

En el plano interior esta agenda tiene sus agentes ejecutores dentro de la ultraderecha golpista, Recientes asesinatos selectivos de dirigentes chavistas, intento de reactivación del terrorismo (guarimbas) que ya ha provocado el asesinato de dos policías y la reciente aprobación, por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, de la mal llamada "Ley de Amnistía" con el apoyo entusiasta, en el Estado español, del Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos, así como de numerosas figuras políticas.

Esta "Ley de Impunidad", que ya ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, busca perdonar hasta 50 tipos de delitos cometidos "desde el 1 de enero de 1999 y hasta la entrada en vigor de la Ley", es decir, en los periodos de gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, y siempre que se hubieran "cometido por la participación en manifestaciones o protestas" dirigidas "a cambiar el orden institucional o el gobierno establecido". Las acciones violentas cometidas a día de hoy por la oposición, destinadas a derrocar al gobierno, quedarían impunes. Incluso delitos como el "tráfico de drogas de menor cuantía" o "fraude, estafa y usura en la construcción de viviendas" están incluidos en la lista.

Llamamos a la denuncia internacional de esta Ley de Impunidad, y exigimos que cese la injerencia del gobierno español contra Venezuela y su connivencia con la derecha golpista.

La guerra económica, mediática y política que sufre Venezuela no es aislada. Es parte del intento de restauración neoliberal que vive toda América Latina, con Brasil como otro de los escenarios de intervención.

VENEZUELA NO ESTÁ SOLA – VENEZUELA SE RESPETA

Suscriben:

1. Asamblea Bolivariana de Catalunya 2. Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez 3. Círculo Bolivariano La Puebla 4. Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza 5. Iniciativa Solidaria Internacionalista- Burgos 6. Plataforma Bolivariana de Canarias 7. Plataforma Bolivariana de Madrid 8.-Venezuela Aurrera: Plataforma Vasca de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, compuesta por 28 colectivos: Alternatiba, Aralar, Arbol Euskal Herria, Askapena, Asodemuc, Bachue (Kolonbiako Errefuxiatuak Euskal Herrian), Cine de Base, Círculo Bolivariano "La Puebla", Ernai, Euskadi-Cuba, Ezker Anitza-Izquierda Unida, Gazte Komunistak, Gazte Komunisten Batasuna (GKB), Giltza, Ikasle Abertzaleak, Ikasle Ekintza, Inti Kokone, IPES-GITE, LAB, Komite Internazionalistak, Marcha Patriótica Euskal Herrian (Colombia), Bakea eta Duintasuna, PCE-EPK, Resumen Latinoamericano, Revista "Encuentros", Sodepaz Nafarroa, Sortu, Emigrados sin Fronteras. 9. Plataforma Canaria de Solidaridad con los Pueblos 10. Alternativa Nacionalista Canaria 11. Anova-irmandade Nacionalista 12. Asamblea Republicana 13. Asociación Cultural Guiniguada Comunicación-Radio Guiniguada 14. Asociación de Amizade Galego-cubana Francisco Villamil 15. Ateneo de Madrid 16. Ateneo Popular de Solidaridad entre los Pueblos 17. Bloque Nacionalista Galego (BNG) 18. Central Unitaria de Trabajadores (CUT) 19. Colectivo Canario Siembra de Solidaridad con Guatemala 20. Colectivo 26 de Julio 21. Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos 22. Confederación Intersindical Galega (CIG) 23. Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba-Madrid 24. Esquerda Unida (EU) 25. Federación Sindical Obrera de Canarias (FSOC) 26. Frente Popular Galega (FGG) 27. Intersindical Canaria 28. Intersindical-Sindicato ferroviario 29. Isca!-Orgacinao Xuvenil 30. Izquierda Castellana 31. Izquierda Republicana 32. Izquierda Unida 33. Mar de Lumes 34. Movemento Galego ao Socialismo (MGS) 35. Paraguay Resiste Madrid 36. Partido Comunista de Galicia (PCG) 37. Partido Comunista do Pobo Galego (PCPG) 38. Partido Comunista de los Pueblos de España 39. Plataforma de Solidaridad del Mediterráneo 40. Terra Liberada 41. Tiwizi 42. Unidad del Pueblo 43. Vía Democrática-Marruecos 44. Xuventude Comunista de Galicia

Fuente: <http://embajadadevenezuela.es/noticias/5757-manifiesto-por-venezuela-bolivariana>

¿QUIÉN MATÓ A MONTESQUIEU?

Hoy, en Venezuela, Montesquieu y su delicada teoría sobre la separación y el control entre los poderes del Estado están agonizando.

Sería inimaginable en ningún país de la Unión Europea que un partido político que por primera vez en lustros detentará el poder legislativo se dedicara a desmantelar todo el entramado jurídico tejido a lo largo de los años. Lo mismo cabría decir de Estados Unidos. La institucionalidad sistémica actuaría de inmediato. Esto en una interpretación bondadosa, porque la realidad demuestra que cuando se sienten amenazados no dudan en emplear una fuerza coercitiva cercana al chantaje. Ahí están los ejemplos de Grecia, con el desconocimiento de la voluntad popular expresada en un referéndum, o Italia, donde se han impuesto gobiernos más allá de los resultados electorales.

Sin embargo, el intento de voladura del marco de convivencia venezolano perpetrado por la mayoría de derechas en la Asamblea Nacional no sólo se permite sino que se apoya desde gobiernos extranjeros, instituciones del capital y medios de comunicación. Desde el mismo momento en el que tomaron las riendas del parlamento, los dirigentes derechistas mostraron su intención de constituirse en un poder superior al resto de poderes del Estado y utilizar la capacidad legislativa para hacer añicos el delicado juego de contrapesos que caracteriza a la democracia.

En sus declaraciones públicas, los diputados opositores se reclaman legitimados para subvertir el orden establecido y conminan a los demás poderes estatales a obedecerles. Pretenden ignorar que la democracia de origen liberal –de la que ellos, curiosamente, se erigen en defensores frente al supuesto autoritarismo chavista- se basa en el control que ejercen entre sí los diferentes poderes. No hay ningún poder por encima de los otros. El Poder Legislativo no puede exigirles anuencia acrítica a los poderes Ejecutivo, Judicial, Electoral y Popular (cabe recordar que la Constitución de 1999 incorpora a los tres poderes clásicos los novedosos Electoral y Popular). Tampoco hay poderes independientes, que se arroguen la capacidad de actuar de forma aislada, ajenos al contexto político-institucional.

La oposición arrasó con este elemental principio de la arquitectura democrática desde que asumió la mayoría parlamentaria. Ha arremetido contra el Poder Ejecutivo al rechazar el decreto de declaración de emergencia económica, cuando paradójicamente basa todo su discurso en denunciar una supuestamente apocalíptica situación social. En las últimas fechas ha anunciado que exigirá a Nicolás Maduro su partida de nacimiento, adscribiéndose así a las tesis xenófobas de los sectores ultraradicales que señalan que el presidente no puede ostentar el cargo porque no es venezolano. ¿Se podría pensar en el Congreso de los Estados Unidos reclamándole a Obama que demuestre su nacionalidad, avalando los ataques de los halcones neocon y poniendo en peligro toda la institucionalidad del país?

Tampoco se han librado el Poder Electoral, al querer invadir la organización de comicios y referendos que ha sido competencia del Consejo Nacional Electoral durante estas casi dos décadas, y el Poder Judicial, con el intento de promulgación de una ley de amnistía que respalda cualquier hecho delictivo, incluidos los asesinatos, si se engloba en una supuesta protesta política, liberando de esta forma a personas sentenciadas por los tribunales por delitos excepcionalmente graves. Es cuestión de tiempo que llegue la arremetida contra el Poder Popular, con la aprobación de leyes que cercenen la capacidad de maniobra y autonomía de comunas y consejos comunales.

La bancada derechista ha respondido a cada objeción arrogándose la representación popular, como si el resto de poderes no hubiera sido elegido por el pueblo, ya sea de forma directa (el presidente de la República) o indirecta a través de instituciones también electas. En todos los casos el argumento ha sido el mismo: la Asamblea tiene la capacidad para hacer y deshacer a su antojo por encima de cualquier consideración.

El Tribunal Supremo de Justicia ha tenido que ejercer su función de contrapeso de esta particular interpretación de la potestad legislativa, vetando diversas iniciativas de la derecha por su carácter inconstitucional. Como era de esperar, la oposición ha acusado al alto tribunal de estar cooptado por el chavismo. Se trata de una acusación de enorme gravedad. Los magistrados estarían incurriendo en prevaricación, es decir, dictar una resolución a sabiendas de que es injusta. Es el mayor delito que puede cometer un juez. Con este tipo de ataques, la derecha arroja dudas sobre la legitimidad de las instituciones con el consiguiente riesgo de desafección popular hacia las mismas e incluso la posibilidad de alentar salidas extrademocráticas.

El venezolano medio pide una solución a sus problemas cotidianos. Este fue el motivo por el que se le otorgó la confianza mayoritaria a la derecha en los pasados comicios legislativos. El electorado optó por un cambio para reconducir la situación económica. Han pasado cuatro meses y la derecha sigue sin dar respuestas a estas demandas.

Si la oposición quiere cambiar el marco de convivencia del que se han dotado los venezolanos y venezolanas la única vía legítima es la promulgación de una nueva Constitución. Todo lo demás son subterfugios inadmisibles en una democracia. Ocurre que la derecha sabe que el pueblo no está reclamando otra Carta Magna sino, como se ha citado anteriormente, soluciones económicas. No le salen las cuentas para iniciar un proceso constituyente y por eso opta por formas espurias para dismantelar la legalidad institucional.

Hoy, en Venezuela, Montesquieu y su delicada teoría sobre la separación y el control entre los poderes del Estado están agonizando. Pero su asesino no es aquel a quien señalan los medios de comunicación hegemónicos del neoliberalismo. Quien les ha asestado la puñalada es, precisamente,

el que a grandes voces se reclama como víctima. Pero el público de esta obra mediocre, el pueblo venezolano, conoce de sobra el guión y los personajes

Alejandro Fierro. CELAG

RADIOGRAFÍA DE LA MUD

Catorce son los partidos incluidos en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que han obtenido representación parlamentaria en la nueva Asamblea Nacional. Aquí, una radiografía de cada uno:

Primero Justicia (PJ): 33 diputados. Es un partido que surge en el año 2000 en el ámbito regional, proveniente de una sociedad civil homónima, que participa a nivel nacional por primera vez en 2003. Sus principales referentes son Henrique Capriles Radonski, actual gobernador del Estado Miranda, quien compitió por la presidencia en 2012 y 2013 contra Hugo Chávez y Nicolás Maduro respectivamente; Julio Borges, diputado de 2005 a 2015 y Carlos Ocariz, alcalde del municipio de Sucre. Aunque en un congreso interno celebrado en 2007 los miembros de PJ hayan definido a su partido como de tendencia centro-izquierdista, es un partido que no cuestiona la economía de mercado.

Además, Primero Justicia ha tenido participación activa tanto en el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 como en el paro petrolero de 2002-2003. En 2005, tras la decisión conjunta con toda la oposición de no participar en las elecciones legislativas en protestas por la desconfianza que despertaba el Consejo Nacional Electoral, Primero Justicia se fractura. De allí, un sector encabezado por Leopoldo López y Delsa Solórzano va a salirse del partido creando una formación propia. Al igual que otras agrupaciones políticas opositoras, PJ recibe financiamiento internacional de diversas fundaciones y organismos, entre los que se destacan la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y la USAID, tal como denuncia la abogada y periodista Eva Golinger. Junto con Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y Avanzada Progresista, conforma el bloque "moderado" dentro de la MUD.

Acción Democrática (AD): 26 diputados. Es uno de los partidos tradicionales de Venezuela. Fue el partido, junto con COPEI, que se alternó por más de cuatro décadas en el poder en el período conocido como "Pacto de Punto Fijo". Originalmente representaba una ideología de centro-izquierda, pero poco a poco ha virado hacia un posicionamiento socialdemócrata de fuerte corte liberal. No obstante, el partido sigue siendo miembro de la Internacional Socialista.

Acción Democrática ha sido un fuerte opositor del Chavismo. Desde 2008 forma parte de la MUD y su principal referente en la actualidad es Henri Ramos Allup, quien preside la nueva Asamblea Nacional, tras imponerse a Julio Borges, candidato de Primero Justicia. En cables filtrados por Wikileaks, la embajada de EEUU en Venezuela decía sobre Allup: "en vez de cortejar a los votantes venezolanos, la principal estrategia de Ramos ha sido intentar conseguir la ayuda de la comunidad internacional". Al mismo tiempo, los cables revelan numerosos pedidos de financiamiento de la dirección de AD a EEUU.

Un Nuevo Tiempo (UNT): 20 diputados. Es un partido que surge en 1999 en el Estado Zulia –el cual gobierna desde el 2000- a partir de un desprendimiento de AD, y que en 2006 logra instalarse a nivel nacional, promoviendo la doctrina de la democracia social. Uno de sus principales referentes fue Manuel Rosales, quien compitió con Chávez en las presidenciales de 2006 y comandó el triunfo opositor en 2007 frente al intento del chavismo por reformar la Constitución. En 2002, Rosales firmó el Decreto que proclamaba a Carmona como presidente de Venezuela, avalando el golpe contra Hugo Chávez. En 2009, tras ser acusado por hechos de corrupción, Rosales pide asilo político en Perú.

Voluntad Popular (VP): 14 diputados. Surge en el 2009 como movimiento social y político y en el 2011 se inscribe estrictamente como partido. Su leit motiv son los supuestos abusos de poder del chavismo. Junto con Vente Venezuela,

Alianza Bravo Pueblo, Proyecto Venezuela, y Copei, representan el ala más dura de la MUD, que pugna por una salida anticipada de Nicolás Maduro. Su principal referente, Leopoldo López, fue

alcalde del municipio Chacao y hasta 2006 compartió partido (Primero Justicia) con Henrique Capriles. Juntos tuvieron una participación destacada en el golpe de Estado de 2002 en el episodio de asedio a la embajada de Cuba. En 2014 fue condenado por la Justicia a casi 14 años de prisión, acusado de ser uno de los instigadores principales de los hechos violentos de febrero de 2014 conocidos como "guarimbas", que dejaron como saldo 43 personas asesinadas. Al mismo tiempo, López fue uno de los firmantes, junto con María Corina Machado y Antonio Ledezma, del plan insurreccional conocido como "La Salida".

A partir de un encuentro en Bogotá en 2011, Leopoldo López estrechó vínculos con el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Voluntad Popular ha manifestado en múltiples ocasiones su rechazo a la nacionalización de PDVSA, como así también a los controles de precios. Por el contrario, apoya la economía de mercado.

Avanzada Progresista (AP): 3 diputados. Es un partido fundado en 2012, autodefinido como progresista, solidario y humanista. A diferencia del resto de los partidos de la MUD, parte de sus miembros provienen del PSUV. Su principal referente es Henri Falcón, gobernador del estado Lara, secundado por el periodista Vladimir Villegas y el diputado Ismael García. Consultado por la ideología de su partido, Falcón respondió que "no es solamente de izquierda, sino una izquierda eficiente, una izquierda moderna, moderada, progresista; como la de Lula, como la de Bachelet". En su acta fundacional, Avanzada Progresista rechaza la estatización exagerada de la economía, y cree en la participación conjunta del Estado y la iniciativa privada.

La Causa Radical (LCR): 4 diputados. El partido se funda en 1971 a partir de un desprendimiento del Partido Comunista de Venezuela. Persigue la doctrina de la "democracia radical". En 2002 La Causa R decidió formar parte de la Coordinadora Democrática, que aglutinaba una coalición de partidos y organizaciones de amplio espectro cuyos elementos en común eran ser opositoras al gobierno de Hugo Chávez, pero fue disuelta en 2004.

Alianza Bravo Pueblo (ABP): 1 diputado. Es un partido que surge en el 2000 a partir de una escisión de AD que apoyaba a Antonio Ledezma, quien se convertirá en su principal líder y llegará a ser en 2008 alcalde metropolitano de Caracas. Actualmente Antonio Ledezma se encuentra encarcelado, acusado de participar junto a Leopoldo López y María Corina Machado del plan denominado "La Salida", que buscaba derrocar al presidente Maduro.

Movimiento Progresista De Venezuela (MPV): 4 diputados. El Movimiento Progresista surgió como una división del partido político Patria Para Todos (PPT), tras dos años de conflictos internos por la ruptura de la coalición con el gobierno de Hugo Chávez, un grupo denominado PPT-Maneiro (simpatizantes al gobierno de Chávez) y otro PPT (oposición) se disputaron los símbolos del partido a meses de las elecciones presidenciales de 2012. En su declaración de principios pugnan por una "economía mixta", donde "el Estado sea propietario de las industrias básicas fundamentales, manejadas con criterios gerenciales y técnicos adecuados. Pero al mismo tiempo, el Estado debe garantizar reglas claras a la iniciativa privada y garantías jurídicas a largo plazo con el propósito de promoverla". Uno de sus principales referentes es Liborio Guarulla, líder indígena y actual gobernador del estado Amazonas. En 2015 decidieron formar parte orgánica de la MUD.

Cuentas Claras (CC): 2 diputados. Es un partido regional que surge en 2004, de la mano de Vicencio "Enzo" Scarano Spisso, con fuerte raigambre en el Estado Carabobo. Enzo Scarano fue alcalde de San Diego, y en el 2014 fue condenado por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano a 10 meses de prisión y destitución del cargo por desacato a la orden de prohibición de barricadas en su jurisdicción y colaborar con las protestas estudiantiles que buscaban tumbar al gobierno de Nicolás Maduro.

Proyecto Venezuela (PRVZL): 1 diputado. Es un partido político de raíz social- cristiana, fundado en 1998 por Henrique Salas Römer, uno de los impulsores del referéndum revocatorio contra Chávez en 2004. De acuerdo a sus principios ideológicos, el PRVZL defiende la propiedad privada y es pro-mercado. En muchas ocasiones,

Proyecto Venezuela ha mantenido una actitud crítica contra el resto de la oposición ante las carencias de un proyecto de acción mancomunada.

Vente Venezuela (VV): 1 diputado. Es una organización que resalta la figura del individuo, de la propiedad y fuertemente crítica respecto a lo que definen como "populismo". Se proponen la superación del clivaje izquierda/derecha por considerarlo obsoleto. Su principal referente de María Corina Machado, exdiputada que fue depuesta en 2014 tras aceptar el cargo de "representante alterna" de Panamá en una cumbre de la OEA. Junto a Antonio Ledezma y Leopoldo López, fue firmante del plan "La Salida" que buscaba destituir al gobierno de Nicolás Maduro. Machado fue la dirigente de la oposición venezolana más sobresaliente en las manifestaciones posteriores al 12 de febrero de 2014.

Gente Emergente (GE): 1 diputado. Es un partido de tendencia de centro-izquierda que en 2008 rompió con el oficialista PSUV. Para las elecciones de 2010 deciden sumarse orgánicamente a la MUD.

Convergencia (Conv): 1 diputado. Es un partido conservador, basado en la ideología de la democracia cristiana, defensor de la propiedad privada y la familia. Surge a partir de un desprendimiento de COPEI. Su presidente actual es Juan José Caldera.

Fuerza Ciudadana: 1 diputado. Es un partido político de corte socialdemócrata, de alcance regional que tiene presencia únicamente en el Estado Apure. Fue fundado el 11 de marzo de 2003 por Luis Lippa tras una escisión del partido Acción Democrática.

Agencia ALAI. Parte de un artículo de Agustín Lewit y Gisela Brito – Dossier Correo n° 43.